



Sr. Amilivia González, Presidente

Sr. Rey Martínez, Consejero

Sr. Velasco Rodríguez, Consejero y
Ponente

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en San Andrés del Rabanedo (León) el día 14 de junio de 2012, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por Dña. xxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 17 de mayo de 2012 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en una caída por el mal estado de la acera.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 18 de mayo de 2012, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 323/2012, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 17/2012, de 3 de mayo. Turnado por el Sr. Presidente del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Velasco Rodríguez.

Primero.- Mediante escrito de 3 de julio de 2009 Dña. xxxx, de 64 años de edad, presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de xxxx1, debido a los daños ocasionados en una caída sufrida el día 18 de julio de 2008 en la acera de la plaza de xx a causa de una baldosa, hueca y en mal estado. Señala que, tras la caída, se personó en el lugar una



dotación de la Policía municipal y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital hhhh de xxxx1. Identifica como testigos a una empleada del Ayuntamiento y a su marido, que la acompañaba. Reclama 1.976,85 euros.

Adjunta a la reclamación copia de los informes relativos a la asistencia sanitaria dispensada y de las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción Nº 1 xxxx1, que finalizaron con auto de sobreseimiento libre.

Segundo.- Admitida a trámite la reclamación, el 28 de julio de 2009 la Policía Local informa de que no se pudieron obtener demasiados datos relacionados con la caída, tan sólo identificar a la lesionada, que se desplazaba en ambulancia. "Por ello, dicho agente no pudo observar anomalía alguna a la que la solicitante hace referencia, ni tan siquiera de las circunstancias de la caída".

Tercero.- Acordada la apertura de periodo probatorio, la reclamante presenta escrito en el que solicita que se tome declaración a la testigo y a la Policía Local y propone las preguntas que deben formularse.

Cuarto.- Tomada declaración a la testigo del accidente, manifiesta que no vio la caída, que vio que le sangraba la nariz, que se llamó a una ambulancia, que posteriormente se personó una patrulla municipal y que no ha visto sucesos similares en el mismo lugar.

Quinto.- Solicitado informe al Servicio de Obras e Infraestructuras, (considerado esencial por la aseguradora del Ayuntamiento), el 5 de julio de 2011 el ingeniero de caminos municipal señala lo siguiente: "Debido a la inconcreción del lugar y el tiempo transcurrido, no tengo nada que añadir al informe de la Policía Local".

Sexto.- El 4 de abril de 2012 se concede trámite de audiencia a la interesada, sin que conste que se hayan presentado alegaciones.

Séptimo.- El 8 de mayo de 2012 se formula propuesta desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial, al considerar que no han resultado suficientemente acreditados los hechos de los cuales se deduce la responsabilidad que se reclama.



En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado h), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido, sustancialmente, con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Cabe no obstante poner de manifiesto el excesivo tiempo transcurrido desde que la interesada presenta la reclamación (3 de julio de 2009) hasta que se formula la propuesta de resolución (8 de mayo de 2012). Esta circunstancia necesariamente ha de considerarse como una infracción de los principios y criterios que han de regir su actuación, recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como los de eficacia, celeridad, eficiencia y servicio a los ciudadanos, entre otros.

Debe recordarse, por otra parte, la preceptividad del informe del servicio cuyo funcionamiento hubiera ocasionado la presunta lesión indemnizable prevista en el artículo 10.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial y su finalidad, que no es otra que acreditar la existencia o no de las deficiencias alegadas.

En el presente caso, el informe de la Policía Local se considera insuficiente y no cumple su finalidad, toda vez que no se pronuncia sobre el



desperfecto existente ni sobre su eventual reparación. En este sentido, se reitera que si bien la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos *necessitas probandi incumbit ei qui agit y onus probandi incumbit actori*, no lo es menos que la Administración, por su parte, deberá probar los hechos que desvirtúen los alegados.

En cualquier caso y al margen de lo que más adelante se expondrá sobre el fondo de la cuestión, se insiste en que los informes deben ir referidos al hecho, causa y fecha de la reclamación. Reiteración ya recogida en otros dictámenes de este Consejo Consultivo, tales como el 160/2007 y el 629/2007.

3ª.- Concurren en la reclamante los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Alcalde de la Corporación Local o a la Junta de Gobierno Local, en el caso de la existencia de la delegación de competencias efectuada por el Alcalde a favor de aquélla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.1.s) y 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 142.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La reclamación se ha formulado en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esto es, dentro del plazo de un año.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a la que se remite, de forma genérica, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la reiterada doctrina del Consejo de Estado así como la de este Consejo Consultivo, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:



a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en una caída por el mal estado de la acera.

En la esfera de las Administraciones Locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que "Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa". Este precepto es reproducido, prácticamente de forma literal, por el artículo 223 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre.

En íntima conexión con lo señalado, el artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.372/1986, de



13 de junio, establece que “Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local”.

Resulta igualmente indiscutible la competencia de los municipios para la “pavimentación de vías públicas urbanas”, lo que necesariamente incluye su mantenimiento, según lo dispuesto en el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Un incumplimiento de esas obligaciones que generara un resultado lesivo podría originar, en su caso, la responsabilidad patrimonial de la Administración Local.

Sentado lo anterior, este Consejo Consultivo considera que no resulta acreditada la realidad del hecho del que deriva la responsabilidad. Los datos constatados no permiten asegurar la realidad del accidente en las circunstancias ni por los motivos que alega la reclamante. No existe, a juicio de este Órgano, base probatoria bastante que acredite el mal estado de la vía y que, como consecuencia de ello, se produjera el accidente.

Ha de recordarse que la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante, de acuerdo con los aforismos citados en la propuesta de resolución *-onus probandi incumbit actori-* y con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al no haberse acreditado suficientemente el hecho causante del daño y las circunstancias en que se produjo, procede desestimar la reclamación, al no concurrir los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En este sentido y con carácter uniforme se viene pronunciando los tribunales. Así, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de febrero de 2006, referida a una petición de responsabilidad en la que, como ocurre en el presente caso, tan sólo se cuenta con la declaración del perjudicado, señala: “Las manifestaciones del conductor del vehículo implicado, por tanto, en los hechos no son prueba bastante para acreditar la forma en que se produjo el accidente, si no están completados con otras pruebas o indicios suficientes (...) Conforme al principio de la carga de la prueba, recogido en el antiguo artículo 1.214 del Código Civil y en el actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbe al actor probar (...) la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos



aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (...)" . Es decir, al recurrente incumbe acreditar el hecho derivado del funcionamiento del servicio público y la existencia del exigible nexo causal entre tal hecho y la lesión denunciada.

No cabe considerar que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas "convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, derivada de la actividad de éstos, por el hecho de que ejerza competencias en la ordenación de un determinado sector, porque, de lo contrario, como pretende la representación procesal del recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico" (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1998).

Si bien este Consejo viene admitiendo en ocasiones la declaración testifical, incluso en aquellos casos en que se mantiene una relación personal con el reclamante, lo cierto es que ni aun con esa declaración puede llegarse a la certeza (ni siquiera indicio) de la naturaleza y entidad del desperfecto causante de la lesión. No puede tenerse la certeza, siquiera indiciariamente, del motivo y lugar donde acaeció el percance ya que la interesada no ha presentado ni una fotografía del lugar en el que, según indica, se produjo el accidente. Además, las declaraciones de la testigo y el parte de la Policía Local tampoco arrojan luz sobre el esclarecimiento de los hechos.

En consecuencia, este Consejo Consultivo considera que, al no quedar constatada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público local y el daño alegado por la reclamante, la reclamación debe desestimarse.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

presentada por Dña. xxxx, debido a los daños sufridos en una caída por el mal estado de la acera.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.